

Aproximaciones a formas de organización y acción política en espacios de exclusión social desde una mirada de la antropología política: análisis de un polígono al suroriente de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México

Approaches to forms of organization and political actions in spaces of social exclusion from a perspective of political anthropology: analysis of a polygon on the southeast of Ciudad Juarez, in the northern border of Mexico

Juan M. Fernández Chico*

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - México

jmfernandezchico@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo busca identificar las formas de asociación y acción políticas de poblaciones en espacios de exclusión social, haciendo un acercamiento desde la antropología política para identificar cómo estas, más allá de ser apolíticas o despolitizadas por no pasar por las arenas institucionales, desarrollan una práctica política informal, subyacente a las instituciones burocráticas. Para esto se trabajó con siete grupos de pobladores en un polígono al suroriente de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, asentados en zonas habitacionales cerradas con vivienda tipo interés social alejadas de la mancha urbana, la mayoría familias jóvenes empleadas en la industria maquiladora, usando técnicas como la entrevista, la entrevista a profundidad y la etnografía. Se encontró que estas poblaciones desarrollan una forma de política que no pasa por los discursos o legitimidades del Estado, sino que crean un sistema subyacente de prácticas, formas de organización, vinculación y gestión de recursos para satisfacer necesidades colectivas de manera personalizada e informal. Estos hallazgos no son compartidos por los estudios clásicos de la ciencia política, los cuales se han enfocado en aquellas prácticas que pasan por las arenas institucionales, por lo que se concluye con un giro teórico hacia la antropología política.

Palabras claves: Organización y acción política, exclusión social, Ciudad Juárez, antropología política, subyacencia política.

ABSTRACT

This study identify the forms of political associations and action of population in places of social exclusion from the perspective of the political anthropology, concluding that this population, more than being apolitical or depoliticized for not passing through the institutional arenas, develop an informal political practice underlying of bureaucratic institutions. To achieve this, we worked with seven groups of people in a polygon on the southeast of Ciudad Juarez, in the northern border of Mexico, settled in closed residential areas with small houses made by the government away from the city, where young and workers of the maquiladora industry families live, and using techniques as interview, in depth-interview and ethnography. It was found that these populations develop a form of doing politics that does not pass through the State legitimization and discourses, but rather create an underground system of negotiations, organizations and practices to manage collective services and needs in a personal and informal way. These findings are not shared by the classical political science, which have focused on those practices that pass through the institutional arenas, so it concludes with a theoretical turn into political anthropology.

Keywords: Action and political organization, social exclusion, Ciudad Juarez, political anthropology, underground politics.

*Licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro en Ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias sociales en la terminal de Gobierno y política pública por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Recibido: 25/06/2018 Aceptado: 24/01/2019

1. Antecedentes y justificación: lo político desde la antropología

Este artículo se desprende de un trabajo de investigación llamado “Exclusión social y subjetividades política en un polígono en Ciudad Juárez en la frontera norte de México”, en donde se hace una revisión de formas de organización y acción política que no pasan por las arenas institucionales en espacios con restricción a servicios públicos y derechos sociales dentro de la mancha urbana. Se parte de la antropología política para tener alcanzado más fenómenos que discuten asuntos públicos y se resuelven de manera colectiva pero que no son legitimados por las arenas institucionales, como son los partidos políticos, asociaciones civiles u organismos o procedimientos que recurren al Estado para fijar y resolver problemas públicos.

Aunque es un estudio de ciencia política, se parte de la antropología por su capacidad de estudiar los universos simbólicos y colectivos de los sujetos a través de herramientas como la etnografía política, que hace el cruce de la ciencia política y la antropología (Auyero, 2012). Esto tiene como objetivo estudiar las formas de organización política desde los sujetos, alejado de las dinámicas hegemónicas de occidente, con la intención de reconocer otras formas de construir y reproducir lo político.

La antropología política estudia formas de acción y organización política que no pasan por la formalidad del Estado muchas veces por encontrarse en la irregularidad y la informalidad, un fenómeno frecuente en las sociedades latinoamericanas que han sido testigos históricos de la plasticidad del Estado (Sarmiento, 1997).

En una definición teórica-metodológica, la antropología política basa la mayoría de sus conceptos en la ciencia política (poder, autoridad, gobierno, ciudadanía, participación) pero utiliza herramientas antropológicas (como la etnografía, la observación, la descripción densa), enfocándose en el estudio de los sujetos y sus negociaciones colectivas políticas alejadas de las instituciones formales, entendida como diversa y flexible, incluso más allá de los límites del Estado (Fábregas, 2014). Este último elemento, pues nos permite discutir entre la *política*, como la arena institucional donde se discuten las agendas públicas, y lo *político*, como aquellos esfuerzos subjetivos y colectivos por incidir en la vida pública sin pasar por la institucionalidad (Padilla, 2004; Tamayo, 2010).

El uso de la etnografía política sirve para tener más herramientas metodológicas que nos permitan acercarnos a las formas de negociación de los individuos con estructuras de poder, no sólo con la intención de descifrar los contextos que habitan, sino la forma en que construyen, piensan y significan esas estructuras (Auyero, 2012). Esto no debe sólo leerse solo como una propuesta metodológica sino como parte de una discusión teórica sobre cómo estudiar fenómenos políticos.

2. De Ciudad Juárez al suroriente: ciudad dormitorio, industrial y migrante

Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, tuvo una oleada migratoria de mexicanos provenientes de Estados Unidos en los años sesentas al terminar el Programa Bracero, un acuerdo laboral entre México y Estados Unidos para llevar mano de obra mexicana para trabajar los campos de cultivo con la intención de sustituir a los trabajadores que se encontraban en la guerra y acelerar el crecimiento económico. Estos trabajadores repentinamente desempleados regresaron a las fronteras mexicanas, las cuales no estaban listas ni en términos de infraestructura ni de empleo para recibirlos, por lo que se llegó a otro acuerdo entre ambos países: Estados Unidos exportaría grandes plantas industriales a la zona fronteriza en donde, por un lado, debía satisfacer la demanda de empleo y, por otro, Estados Unidos lograría producir a costos mucho más bajos y sin haber un aumento en los precios del traslado para transportar los productos terminados de regreso a Estados Unidos en donde serían colocados en sus mercados locales.

Esta coyuntura histórica introdujo a ciudades como Ciudad Juárez a dinámicas económicas que impactaron en todos los demás sectores, principalmente en los de planeación urbana y migratorios,

pues las plantas industriales requerían una gran cantidad de población en edad laboral que no podía ser satisfecha con la población originaria de la ciudad.

El aumento del empleo en Ciudad Juárez a comparación con los números de otras partes del país sirvió como imán para una serie de nuevas oleadas migratorias (Martínez, 2012), provocando que la ciudad creciera a un ritmo más rápido al de la infraestructura urbana, principalmente de la vivienda y el acceso a servicios públicos básicos, lo que desarrolló cinturones de pobreza en zonas periféricas con pobladores con trabajos precarios y sin acceso a una calidad de vida digna.

La respuesta a la demanda de vivienda vino con una serie de reglamentaciones federales, estatales y municipales a partir del año 2001 que coincidieron para desarrollar grandes complejos habitacionales en zonas alejadas de la mancha urbana, con casas que no superaban los 44 metros cuadrados y que eran construidos por compañías privadas que sustituyeron al Estado como proveedor al derecho de vivienda para convertirlo en un negocio rentable en donde los únicos afectados eran las familias pobres que buscaban una vivienda propia (Maycotte & Sánchez, 2010), a las cuales sólo se podía acceder por medio de un créditos público que se otorgaba al tener un trabajo formal, pues gran porcentaje del préstamos para acceder a una propiedad venía de instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el cual descontaba sus cuotas vía nómina de pago.

Estas características poblaciones y espaciales son las que se encuentran en zonas como el suroriente de Ciudad Juárez, con grandes complejos habitacionales en zonas aisladas en donde los terrenos eran más baratos para ser desarrollados por la compañías inmobiliarias y cercanas a las plantas industriales.

El suroriente tiene características espaciales que lo diferencian de otras zonas de la ciudad: grandes espacios de dispersión urbana, zonas habitacionales aisladas por bardas perimetrales, avenidas que impiden una circulación fluida del parque vehicular y plantas industriales que absorben grandes cantidades de terreno y que funcionan como imanes para las zonas habitacionales, como lo muestra el mapa 1.



Mapa 1. Obtenida por medio de Google maps, delimitación propia.

Esta serie de condiciones provocó efectos negativos en el suroriente, como fue la falta de acceso a servicios públicos (agua, electricidad, gas, servicios telefónicos y de limpieza, transporte) y de derechos sociales (hospitales, servicios de bomberos, seguridad), el abandono de casas que eventualmente fueron tomados por grupos delincuenciales y la depreciación de zonas habitacionales.

3. Propuesta metodológica: selección de casos de estudio y técnicas de investigación

La antropología política no es sólo una caja de herramientas para estudiar fenómenos políticos, sino un paradigma teórico y conceptual que permite dar un giro al cómo y por qué estudiamos estos fenómenos. La ciencia política clásica cerró la puerta a manifestaciones que no pasaban por las arenas institucionales, acusándolas de no ser política o de generar discursos coaccionados que sólo repetían lo que los sistemas formales les obligaban a repetir.

Se recurrió a la antropología política para tener un acercamiento más detallado a los sujetos involucrados en condiciones de exclusión y la forma en que construyen sus universos simbólicos, tratando de desenredar esa complejidad de actores, tanto públicos como privados, y condiciones que se mueven en la formalidad e informalidad.

Se seleccionaron siete poblaciones y organizaciones de zonas residenciales ubicadas en distintas partes del polígono que tuvieran condiciones más o menos similares: zonas habitacionales cerradas, con viviendas de interés social, en donde predominaran familias jóvenes empleadas en las industrias maquiladoras, que fueran dueñas de sus viviendas y que aún estuvieran pagándolas.

En el cuadro de abajo se describe cada uno de los casos.

Caso	Zona residencial	Descripción
Pobladores sin organización formal	Pedregal San Isidro	Estos pobladores no tienen una organización formalizada, ni tanto en términos públicos ni de manera interna, por lo que todas sus gestiones y estrategias políticas se mueven de manera atomizada, generando vinculaciones estrechas entre los vecinos a partir de necesidades muy específicas.
Sistema de transporte social	Raiteros de Sierra Vista	Organización sostenida en cinco miembros y liderada por un miembro fundador, se responde a la deficiencia del transporte público, esporádico y lento, generando un sistema de transporte social que conecta al fraccionamiento de Sierra Vista con una vía con acceso a transporte público. No cuentan con permiso de funcionamiento y dos de las cinco camionetas no tienen placas o sus conductores no tienen licencia.
Organización formal extinta	Comité de vecinos de Jardines de Roma 1	Esta organización se mueve bajo la sinergia generada por el antiguo comité vecinal, el cual nace de manera improvisada, sin registro formal en el municipio ni apoyo de la constructora, respondiendo a las necesidades gestionar servicios y administrar la seguridad privada al interior del fraccionamiento. Hoy existe como un referente simbólico, pues el nombre de Comité vecinal ha desaparecido, aunque son los mismos vecinos de aquel tiempo los que hacen el trabajo de gestión actual.
Organización vecinal sin registro	Comité de vecinos de Santa Isabel, etapa 1	Este comité, a pesar de no estar registrado en el municipio, tiene la aprobación total de la constructora, quien además, como una política interna, capacitó a varios vecinos para integrar el comité y hacer trabajos de gestión de servicios y recursos y trabajo administrativo.
Organización vecinal formalizada	Comité de vecinos de Urbivilla	El comité vecinal cuenta con registro en el municipio y tiene una vinculación muy estrecha con distintas instancias públicas locales por la vinculación de la presidenta con el DIF, en donde trabaja como voluntaria. Su trabajo se concentra en un parque que rodea las casas que habitan la mayoría de los miembros del comité, pero que ahora ha desembocado en la creación de un comité comunitario a partir de la apropiación de una casa abandonada.
Organización vecinal formalizada	Comité de vecinos de Senderos de Oriente	Es un comité de vecinos de reciente creación que trabaja de la mano de una líder popular partidista, Yaluany, que les ha ayudado a vincularse con instituciones públicas y sociales.

Tabla 1. Elaboración propia.

El proceso de selección de los casos se hizo a partir de dos aspectos: la condición de exclusión (desde los más alejados hasta los menos de la mancha urbana) y de accesibilidad política (que cuentan con alguna forma de organización reconocida por el Estado hasta acciones aisladas). Estos casos muestran que tanto la exclusión como las estrategias políticas no son absolutas, sino que se mueven en un abanico de gradualidades y expresiones que nos ayudan a entender que la y lo político muchas veces es el resultado de negociaciones individuales de necesidades diversas sobre asuntos públicos no necesariamente coincidentes.

4. Excluidos incluidos, subyacencia política y agendas públicas

Exclusión social, un acercamiento a los excluidos incluidos

Hay algunos conceptos cercanos a la definición de exclusión social, como es pobreza, que se refiere a una serie de carencias que van de lo patrimonial a la capacidad de garantizar una comida diaria (CONEVAL); marginación, que consiste en la ausencia de oportunidades sociales de crecimiento y las capacidades para generarlas, además de la carencia de bienes y servicios para aspirar al bienestar (CONAPO), el cual se asocia con habitantes urbanos vinculados a la informalidad laboral y de vivienda (Segal, Doyhamboure, & Barahona, 1981); periferización, condiciones de marginación causada por habitar cinturones de pobreza en una lógica de centros conectados y periferias desconectadas (Abramo, 2013).

Estos conceptos nos conducen al de exclusión social, en donde es posible detectar las definiciones de pobreza, marginación y lugar del hábitat pero incluyendo la restricción estructural para acceder a derechos sociales como crédito, trabajo digno, servicios de salud, educativos y justicia, adecuados (Matute, 2013) y que establece una relación con espacios excluidos que además imposibilitan el acceso a servicios y derechos que otorga la interactividad con la ciudad, segmentándola en grupos humanos que, por un lado, sobreviven de manera excluida y alejada, y, por otro, que viven conectados e incluidos (Ziccardi, 2001).

El concepto de exclusión social reconoce que existen factores estructurantes que inciden en la exclusión, y los cuales son causados por actores claves dentro de sectores públicos, privados y sociales (Silver & Daly, 2008), como son las compañías inmobiliarias, la industria maquiladora, los gobiernos locales y grupos fácticos como el narcotráfico o líderes populares.

De acuerdo a Segal, Doyhamboure y Barahona (1981), la exclusión social se aleja de otros conceptos similares al situar al Estado como un actor clave para sumir a la población en condiciones de exclusión, ya sea por la falta de políticas públicas para combatirla, o por o por desarrollar mecanismos de vivienda, trabajo y planeación urbana que la propician.

Esto se traduce en la falta de servicios públicos y derechos sociales, en donde los primeros consisten en recursos naturales y sociales para garantizarse la vida, como son el agua, la electricidad, el gas, el desagüe, la habitabilidad, el transporte, el alumbrado, la pavimentación y los espacios de recreación (Jiménez, 2013), mientras los derechos sociales como aquellas obligaciones de servicios del Estado ante sus ciudadanos, que también pueden ser otorgadas por agentes privados, como son el acceso a salud, educación y trabajo (Gordon, 2001).

Una tarea problemática al momento de definir la exclusión social, es especificar la relación entre espacios y sujetos (¿quién o qué excluye a qué o a quién?). En el caso del suroriente, hay una relación equivalente entre ambos a partir de la formación de fuerzas estructurantes que se relacionan con el trabajo, instituciones crediticias y vivienda, que empujan a las poblaciones más empobrecidas a las zonas más alejadas y con menos acceso a servicios públicos y derechos sociales, generando un modelo de ciudad-dormitorio a partir de acercar mano de obra con bajos estudios, jóvenes y en situaciones de vulnerabilidad económica a la industria maquiladora en zonas habitacionales baratas, de dimensiones pequeñas, lejanas de la mancha urbana y sin acceso a servicios, que no sólo satisfacen la demanda de mano de obra, sino que se convierten en clientes cautivos para las compañías inmobiliarias

y las instituciones crediticias.

Estas poblaciones son las que hemos llamado *excluidos incluidos*, una categoría conceptual que nos ayuda a diversificar la exclusión social a partir de agentes que causan y enganchan a poblaciones vulnerables a sistemas formales que son los causantes de su condición de exclusión.

Estas fuerzas estructurales deben entenderse dentro de un escenario económico a escala global con un sistema económico capitalista que ha generado dinámicas de intercambio comercial entre zonas desarrolladas y en vías de desarrollo, incidiendo en aspectos claves como la planeación urbana, el sistema salarial y los programas de vivienda.

Organización y acción política: un acercamiento desde la antropología política.

Un debate que trajo la antropología a la ciencia política fue la distinción conceptual entre la política y lo político: mientras el primero sirve para definir al sistema institucional legitimado por el Estado en donde se discuten y resuelven asuntos públicos, el segundo son estrategias de negociación sobre el poder y la manera en que se resuelven asuntos públicos sin seguir las reglas de procedimiento de las arenas institucionales.

Tamayo (2010) distingue entre acciones y asociaciones políticas institucionales y no-institucionales al referirse a movimientos sociales que buscan posicionar sus demandas a las agendas públicas sin recurrir a los medios tradicionales, como son los aparatos burocráticos o los políticos, como los partidos y sus cuadros populares.

Como lo menciona Tamayo, las poblaciones vulnerables en términos sociales y económicos son las que deben recurrir a estrategias políticas no institucionales o informales, pues están imposibilitados (porque no tienen los recursos económicos o de capital social) para poder cumplir con las reglas institucionales. Esto quiere decir que la participación política es el resultado de prácticas exclusivas, pues las poblaciones pobres, ilegales, discapacitadas, enfermas, vulnerables o raciales, sexuales o étnicamente no aceptadas, no pueden participar de manera equitativa en las dinámicas políticas desde las instituciones, por lo que se crea todo un sistema político subyacente que coexiste a las dinámicas formales y que permite a poblaciones excluidas poder gestionar recursos, fijar temas en agendas públicas y negociar con el Estado la demanda y satisfacción de necesidades básicas.

Agendas públicas entre lo institucional y la acción política

La construcción de agendas públicas se define como aquellos asuntos de orden público que son expuestos por los ciudadanos para que sean resueltos por las autoridades que toman decisiones sobre política pública (Cobb, Ross, & Ross, 1976). Con una visión clásica de los estudios políticos, las agendas son una lista de temas que son jerarquizados a partir de los intereses de los agentes que los fijan.

De acuerdo a Dalton (2008), son los ciudadanos quienes fijan las agendas a partir de valorar sus intereses colectivos y particulares, y será su capacidad de gestión lo que les permite mover esas temas a las agendas institucionales. Es decir, las agendas se discuten y fijan desde lo informal, pero se resuelven en la formalidad.

Este debate problematiza una vez más las bases de la ciencia política clásica, pues se entendía de que las agendas públicas se construían en las arenas institucionales por actores estratégicos que anteponen sus intereses particulares a los colectivos, pero ahora nos enfrentamos a fenómenos en donde actores no institucionales fijan sus agendas y crean los mecanismos para gestionarlas o resolverlas.

La infrapolítica: hacer política desde fuera de la política

La infrapolítica se puede ubicar dentro lo que Samaddar (2010) llama el nuevo sujeto político: aquel que excede las reglas de la política, las cuales son trasgredidas por poblaciones que se encuentran en los márgenes de los sistemas políticos y económicos formales. Es decir, que se encuentran en un status de no-ciudadanos, pero que son capaces de construir y socializar formas de hacer política más allá de las reglas formales de las arenas públicas.

Así, las poblaciones excluidas construyen relaciones con el Estado a partir de prácticas

subyacentes, una política *underground* de negociaciones y acuerdos que, de no existir, provocaría un asilamiento aún mayor o la imposibilidad de satisfacer cualquier necesidad pública a partir de redes ilegales y opacas que hacen funcionar un sistema administrativo y político, generando instituciones y agendas alternas con miras de autorregulación (Rivera, 2004).

Esto es lo que Foucault (2002) identificaba en las manifestaciones del poder, el cual genera una relación dialéctica entre fuerzas que se expresan de manera explícita, con reglamentos formalizados, y una manifestación oculta, que opera desde la opacidad.

Es James Scott (1990) quien desarrolla esto con mayor profundidad, pues reconoce la relación de fuerzas visibles e invisibles a partir de la lógica de dominados y dominadores, en donde los primeros deben generar un espacio infrapolítico en donde puedan manifestarse libremente sin ser castigados o vigilados.

Esta infrapolítica, como la define Scott, se define a partir de la relación entre legalidad e ilegalidad, en donde grupos marginados establecen relaciones formales con el Estado, pero hacen uso de prácticas ilegales para poder garantizar la efectividad sus acciones.

Debe de entenderse que estas vinculaciones subyacentes son resultado del efecto de aislamiento de poblaciones excluidas, quienes no pueden acceder a las arenas públicas de manera efectiva, ya sea por su incapacidad de movilidad, pues los centros de decisiones políticas se encuentran alejados, o por su insolvencia financiera y educativa, que se les presentan inalcanzables o indescifrables. Pero su condición de exclusión no los aísla de manera absoluta, pues están conectados con los aparatos del Estado por distintos canales, como es su trabajo formal, sus créditos públicos, sus viviendas en zonas habitacionales legales o por medio de constructoras que se hacen cargo de la gestión de servicios o desarrollan comités vecinales que están registrados ante instancias públicas, sólo que estas vinculaciones formales son ineficientes, pocos claras o ilegales.

5. Discusión: las formas de hacer política de las poblaciones excluidas

Aproximarnos a los estudios sobre exclusión social es cargar con una serie de prejuicios sobre las formas de construir y significar sus estrategias políticas de las poblaciones excluidas, pues al no pasar por las arenas institucionales o el reconocimiento del Estado son definidas como apolíticas o despolitizadas, pero esta argumentación no viene de la forma en que definen sus estrategias políticas para satisfacer necesidades básicas, sino de una problema de enfoque teórico que demerita aquellas formas de negociación subyacentes que se fijan desde afuera de las reglas de los aparatos burocráticos y políticos, como es la informalidad o el clientelismo.

Las poblaciones estudiadas despliegan una serie de estrategias políticas que, desde su exclusión, y a pesar de ubicarse dentro del terreno de la ilegalidad, les permite acceder a recursos escasos y resolver problemas estructurales, las cuales se manifiestan a través de la forma en que fijan sus agendas y la infrapolítica.

Las agendas se fijan temas a resolver, representados en forma de necesidades a partir de la carencia o limitación de uno o varios servicios públicos o sociales y son jerarquizados por los perfiles de los pobladores (condición socioeconómica, discapacidad, edad, tamaño de la familia, género, acceso a vehículo o transporte público).

Es importante destacar que estas agendas se construyen a partir de procesos de socialización de información cara a cara por medio de grupos más cercanos en términos espaciales o de manera colectiva (como asociaciones religiosas, deportivas o familiares), como son los casos de los Raiteros, que fungen como una organización laboral; Pedregal de San Isidro, pues al no pertenecer a una asociación de gestión se tejen redes a partir de otros factores más bien lúdicos; el caso de Jardines de Roma 3, a partir de redes de iglesias cristianas por parte de los miembros del comité; o recurriendo a lugares específicos en donde se cons-

truyen y distribuyen redes, como son las tiendas de abarrotes, como el caso de Jardines de Roma 1 en donde incluso hay un equipo de voceo desde la tienda para comunicar juntas o temas urgentes; o por medio de agentes claves que sirven como canalizadores de estas agendas públicas, como el comité vecinal de Santa Isabel 1 en donde se había creado una vinculación de quejas en la figura de la tesorera o en Jardines de Roma 3, en la figura de la presidente.

Lo que se encontró fueron procesos colectivos, dinámicos y en constante construcción, por medio de procesos cara a cara o a partir de espacios o agentes claves que priorizan estos asuntos.

En el caso del comité vecinal de Senderos de Oriente, se construyó una agenda a partir de recoger las demandas de la comunidad, priorizando a tres poblaciones claves: madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que ha canalizado su gestión a desarrollar programas de acompañamiento con los habitantes del fraccionamiento o buscar recursos públicos que se enfoquen en estos tres.

En Jardines de Roma 1, en donde no existe un comité formal, todas las demandas o quejas son llevadas a la tienda de abarrotes del fraccionamiento, el cual funciona como un espacio de constante tránsito y conectividad entre los vecinos, sino de los antecedentes del propietario, que formaba parte del comité vecinal.

En el caso de los Raiteros en Sierra Vista, a partir de un grupo de pobladores que se asocia al momento de identificar un problema de movilidad.

Mientras la ciencia política clásica reconoce que la importancia de actores institucionales para fijar y resolver los temas de una agenda pública, lecturas desde la antropología política reconocer la capacidad creativa y resolutive de agentes no institucionales, como son poblaciones organizadas de forma colectiva que reconoce un problema y condición en común.

Lo que destaca en esto, es que las poblaciones excluidas no sólo padecen esa condición por aspectos económicos o espaciales, sino también una exclusión política. Se encuentran alejados de las oficinas de gobierno o de atención ciudadana, lo que complica su comunicación con el Estado y la gestión de soluciones, aunque sí participan de manera pasiva en la arena política, través del voto y de la demanda de líderes populares partidistas que no tienen ninguna injerencia institucional.

Pero definir a estas poblaciones como excluidas de manera política no debe tampoco traducirse en un desvinculación total o mostrarlas como pasivas y coaccionadas (Padilla, Olivas, & Alvarado, 2014), sino como una forma distinta de establecer negociaciones políticas con la arena institucional.

Estos acuerdos, negociaciones, demandas y vinculaciones informales con los aparatos políticos y administrativos del Estado se construyen a partir de crear redes con los agentes más cercanos de los sistemas políticos: policías, tránsitos, burócratas de campo (como los que revisan los registros de los comités vecinales en la Dirección de desarrollo social o los agentes de gobernación), líderes populares de los partidos o los supervisores de la implementación de programas sociales. Estas poblaciones en exclusión generan dinámicas políticas con el Estado, el gobierno y sus agendas a partir de mecanismos que incluso deben de ser ocultos por su condición de ilegalidad, pero que son pactados de manera abierta.

Los raiteros, por ejemplo, están sometidos a un sistema de cuotas a partir de distintos actores burocráticos o administrativos: desde el policía federal que les cobra por seguridad, los tránsitos que cada semana pasan por una cuota para no detenerlos, o los policías municipales que también reciben una cantidad monetaria para brindar seguridad inmediata.

En cuanto a los comités vecinales de Jardines de Roma 3 y Senderos de Oriente, la figura de Yaulani es clave (presidenta del Comité Vecinal de Jardines de Roma 3 y enlace vecinal de la zona con el PRI), quien tiene una amplia experiencia en la gestión de recursos por medio a cambio de la movilización electoral. Más allá de una actitud pasiva de la pobla-

ción que negocia con el partido el acceso a ciertos programas sociales, lo que se percibe es una dinámica activa que mide los costos y compensaciones de pactar con un partido político para hacerse de productos o servicios que de otra manera no podrían acceder.

La infrapolítica es esencial para las estrategias que construyen estas poblaciones pues les permiten sobrevivir en un mundo político que les es ajeno, pero, a la vez, los hunde en un mundo de ilegalidad e informalidad del que ellos mismos quisieran salir. Los raiteros, por ejemplo, de manera constante aluden su interés por regularizar su trabajo y sus vehículos, pagando impuestos y el ser supervisados por el gobierno; o los comités vecinales no registrados, como el de Santa Isabel 1, que buscan no sólo darse de alta como comité vecinal, sino como asociación civil para poder hacer de su trabajo comunitario un trabajo remunerado.

6. Conclusiones

Aproximarnos a la ciencia política desde la antropología para estudiar formas de organización y acción política de poblaciones vulnerables, nos abre un mundo conceptual y metodológico que comulga de manera más cercana con la forma en que los sujetos viven y transforman la realidad que habitan. Al hacer esto, descubrimos que esas poblaciones entendidas como apolíticas realmente hacen uso de una serie de estrategias que van desde la construcción de agendas públicas hasta el desarrollo de complejos sistemas de negociación entre necesidades y recursos y vinculaciones con los aparatos burocráticos y políticos del Estado.

Más que un problema empírico, nos enfrentamos a un problema disciplinar, teórico y metodológico, en donde es necesario partir desde una mirada antropológica que permite ampliar nuestro rango de análisis e interpretación. No basta estudiar la exclusión como un fenómeno de coerción o parroquialismo político, sino entender la diversidad de factores que inciden en estas poblaciones y las consecuencias que sus formas de organización y acción política tienen en su realidad inmediata.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abramo, P. (2013). Mercado informal y producción del hábitat: la nueva puerta de acceso a los asentamientos populares en América Latina. En T. Bolívar, & J. Espinosa, *Los lugares del hábitat y la inclusión* (págs. 29-58). Quito: FLACSO-CLACSO-MIDUVI.
- Auyero, J. (Julio-Diciembre de 2012). Los sinuosos caminos de la etnografía política. *Revista Pléyade*(10), 15-36.
- Cobb, R., Ross, J.-K., & Ross, M. H. (1976). Agenda Building as a Comparative Political. *The American Political Science Review*, 70(1), 126-138.
- Dalton, R. (2008). *Citizen politics*. Washington: CQ Press.
- Fábregas, A. (2014). *El estudio de la vida política en antropología: un evaluación*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Gordon, S. (2001). Ciudadanía y derechos sociales: ¿criterios distributivos? En A. Ziccardi, *Pobreza, desigualdad y ciudadanía* (págs. 23-36). Buenos Aires: CLACSO.
- Jiménez, S. (2013). Pobreza, exclusión y precariedad en las ciudades bolivianas. En T. Bolívar, & J. Espinosa, *Los lugares del hábitat* (págs. 93-122). Quito: FLACSO, CLACSO y MIDUVI.
- Martínez, W. (2012). Situación y evolución demográfica. En H. Almada, & L. Barraza, *La realidad social y las violencias. Ciudad Juárez* (págs. 21-52). Ciudad Juárez: CONAVIM-UACJ-INCIDE social.
- Matute, N. (2013). Ciudad de Guatemala: centralidad urbana y exclusión social, el caso del asentamiento La Limonada. En T. Bolívar, & J. Espinosa, *Los lugares del hábitat y la inclusión* (págs. 433-446). Quito: FLACSO, CLACSO y MIDUVI.
- Maycotte, E., & Sánchez, E. (Octubre de 2010). Ciudades dispersas, viviendas abandonadas: la política de vivienda y su impacto territorial y social en las ciudades mexicanas. *ACE: architecture, city and environment*, 5(13), 19-32.
- Padilla, H. (2004). Consideraciones sobre política y gobernabilidad fronteriza. En A. P. (eds.), *Gobernabilidad o ingobernabilidad en la región Paso del Norte* (págs. 27-58). Ciudad Juárez: Eón.
- Padilla, H., Olivas, C., & Alvarado, L. (2014). *Ciudad Juárez y la necesidad política. De la ciudad real a la ideal*. Ciudad Juárez: UACJ.
- Rivera, J. (2004). Escenarios de gobernabilidad informal en la problemática urbana de las zonas populares de Ciudad Juárez, Chihuahua. En A. P. (eds.), *Gobernabilidad o ingobernabilidad en la región Paso del Norte* (págs. 187-218). Ciudad Juárez: Eón.
- Samaddar, R. (2010). *Emergence of the political subject*. New Delhi: SAGE Publications India.
- Sarmiento, J. (1997). Exclusión social y ciudadanía política. Perspectivas de las nuevas democracias latinoamericanas. *Última década*, 0.
- Scott, J. (1990). *Domination and the arts of resistance*. Ann Arbor: Yale University.
- Segal, S., Doyhamboure, U., & Barahona, O. (Oct. - Dic. de 1981). Marginalidad espacial, Estado y ciudadanía. *Revista Mexicana de Sociología*, 43(4), 1547-1577.
- Silver, H., & Daly, M. (2008). Social exclusion and social capital: A comparison and critique. *Theory and society*, 37(6), 537-566.
- Tamayo, S. (2010). *Crítica de la ciudadanía*. D.F.: Siglo XXI Editores y UAM.
- Ziccardi, A. (2001). La ciudad y la cuestión local. En A. Ziccardi, *Pobreza, desigualdad social y ciudadanía* (págs. 88-125). Buenos Aires: CLACSO.

